



LA LEY DE LOS PATRIOTAS. La Patriot Act, escrita después de los atentados del 11 de septiembre, fue aprobada con los votos de republicanos y demócratas.

EE UU // PERSECUCIÓN EN NOMBRE DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

## El fantasma de McCarthy vuelve a planear sobre los Estados Unidos

La reelección de George W. Bush no augura un buen futuro para las libertades y los derechos civiles en Estados Unidos. Con la polémica confirmación de su nuevo fiscal general, Alberto Gonzales, Bush ha añadido a su equipo un "alma gemela", cuyos consejos más recientes incluyen aparcar la Convención de Ginebra para los presos de Guantánamo por estar "desfasada".

María Carrión de Quesada  
Nueva York

Para tener una idea de la clase de fiscal general que puede ser Gonzales —un cargo que le convierte en el máximo responsable de la protección de los derechos y las libertades civiles en Estados Unidos— basta con examinar su trabajo como asesor legal de Bush cuando éste era gobernador del Estado de Tejas. Bush aprobó 152 ejecuciones, más que cualquier otro gobernador en la historia moderna estadounidense. Según Gonzales —que durante años se encargó de presentarle las peticiones de clemencia de los condenados—, Bush dedicaba una media de 30 minutos a repasar cada caso antes de tomar su decisión. Por su parte, Gonzales presentaba un resumen escueto de los casos que siempre se ponía de parte de la acusación y jamás incluía los datos atenuantes.

Además de regentar la cámara de ejecuciones más productiva del país, Bush también presidió el sistema penitenciario más poblado de EE UU, y recortó a cada oportunidad los derechos civiles en el Estado de Texas, negándose en una ocasión a apoyar una ley contra los "crimenes de odio" tras el linchamiento de un afroamericano por un grupo de blancos.

Ya en su primer mandato como presidente, Bush se rodeó de un equipo que mantenía su hostilidad hacia los derechos civiles. Eligió como fiscal general a John Ashcroft, un político fracasado —había perdido unas elecciones frente a un rival muerto en accidente aéreo un mes antes de los comicios— que era conocido por su oposición al aborto, a los derechos de los homosexuales y a los programas gubernamentales contra la discriminación racial.

El nombramiento de su sucesor, Alberto Gonzales, hispano de 49 años, ha sido muy contestado porque se le acusa de haber allanado, con su asesoramiento, el camino para los abusos en la prisión de Abu Ghraib, en Guantánamo y en otros centros de detención estadounidenses desplegados por todo el mundo. Incluso un senador demócrata le acusó de estar "en el centro de la decisión gubernamental de autorizar a nuestras fuerzas a que cometieran flagrantes actos de tortura en los interrogatorios de los detenidos".

### Los efectos de la Patriot Act

Y aunque Gonzales intentó rebajar la polémica declarando que "la tortura y los malos tratos no serán tolerados", no dejó de remarcar, en el acto de toma de posesión, que el

presidente le había encargado proteger el país de posibles atentados terroristas.

Tras el 11 de septiembre, y aprovechando el ambiente de pánico general provocado por los atentados, la Administración Bush consiguió que el Congreso aprobara la ley antiterrorista Patriot, en gran parte diseñada por Ashcroft. La contó con el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos. Como relata la periodista independiente Amy Goodman en su reciente libro *En la cama con el enemigo*, Ashcroft lle-

gó a declarar: "A aquellos que atemorizan a la gente amante de la paz con fantasmas sobre las libertades perdidas, mi mensaje es que sólo están ayudando a los terroristas, porque erosionan nuestra unidad nacional y disminuyen nuestra determinación".

La ley Patriot amplía la definición del terrorismo para incluir el "terrorismo nacional," abriendo la puerta a que el Gobierno incremente la vigilancia, el acoso y la persecución criminal contra organizaciones dedicadas a la defensa

## La resistencia a los recortes de libertades

A diferencia del Congreso y el Senado, donde apenas hubo debate antes de su aprobación, la sociedad se movilizó apenas comenzó a perfilarse la ley. Los bibliotecarios y los librerías independientes están a la cabeza de este movimiento. Algunos han puesto carteles advirtiendo al usuario acerca de la ley. Numerosas bibliotecas, incluyendo las de la ciudad de Palo Alto en California, trituran sus documen-



H. B.

tos cada seis días, y emplean programas informáticos que automáticamente borran los datos de los usuarios, siempre que éstos devuelvan los ejemplares. La organización defensora de las libertades civiles ACLU ha presentado una demanda contra la ley por su inconstitucionalidad. Numerosas ciudades y algunos estados han aprobado leyes locales contra algunos aspectos de la Patriot Act.

Y el Centro de Derechos Constitucionales, una pequeña ONG con sede en Nueva York, se querreló contra la Administración Bush por haber creado un vacío legal en el centro de detención de Guantánamo. Un reciente fallo de una juez federal, fruto de la querrela, declara ilegales los tribunales militares que se han establecido para juzgar a estos presos y les concede el derecho a apelar a tribunales civiles.

de los derechos civiles, partidos políticos alternativos, asociaciones culturales o ciudadanas y otros grupos percibidos como disidentes. La ley permite a la policía llevar a cabo registros en secreto, y le proporciona un mayor acceso a datos hasta ahora confidenciales como historiales clínicos o registros estudiantiles de las universidades. Y permite que los no estadouni-

### El barrio neoyorquino llamado el "pequeño Pakistán" ha sufrido un éxodo masivo tras los atentados del 11-S

denses sean detenidos de manera indefinida por sospecha, sin asistencia legal.

Abundan los ejemplos de la persecución de norteamericanos y extranjeros bajo las leyes antiterroristas. Las universidades deben mantener una base de datos detallada sobre los alumnos extranjeros. El Gobierno obliga a los librerías y bibliotecarios a entregar al FBI listas de clientes, fichas de lectura y otros datos hasta ahora confidenciales. Las aerolíneas también están obligadas a facilitar al Gobierno los datos personales de los viajeros, como su raza, los datos de la tarjeta de crédito o incluso qué tipo de comida piden.

Goodman cuenta la historia de un conocido cantante de rap, Michael Franti, cuya madre fue acosada por el FBI después de que su hijo diera un concierto contra la guerra de Iraq. Y cuenta también que el barrio neoyorquino conocido como "pequeño Pakistán" ha sufrido un éxodo masivo tras la persecución de miles de musulmanes por el FBI. Unos 15.000 han salido de estampida hacia Canadá, Europa o Pakistán. "Los inmigrantes están aterrizados. Llegan a su casa y descubren que un agente del FBI o de inmigración les ha dejado una tarjeta de visita en la puerta con una escalofriante nota solicitándoles que se pongan en contacto con ellos. Muchas familias han retirado a sus hijos del colegio y se han esfumado en mitad de la noche para evitar ser desaparecidas".

www.vientosur.info

**VIENTO SUR**

una revista política para el encuentro de ideas, debates, experiencias... de izquierda alternativa